



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2021-00020-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: **FABIOLA GARCÍA DE LÓPEZ**
DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

En el presente asunto, la señora **FABIOLA GARCÍA DE LÓPEZ**, promueve demanda en contra de la **NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, con el objeto de obtener la nulidad de la sentencia No. 48642 del 15 de octubre de 2014, emitida por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual determinó aplicar la compartibilidad de la pensión vitalicia de jubilación oficial que reconoció el Banco Cafetero al señor Javier López Correa con la pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales y negó el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993.

De la misma manera solicita, **se declare administrativa, extracontractual y patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial por falla en el servicio por error judicial.**

Como consecuencia de lo anterior, solicita el reconocimiento y pago a la demandante la suma de **MIL CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.113.575.198,66 m/cte)**, por concepto de daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales.

Conforme con lo anterior, y revisado el expediente, este despacho observa que no es posible avocar conocimiento de la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

Como primera medida, la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagró en el Título V, todos los aspectos relacionados con los presupuestos procesales de admisibilidad de las demandas que se promuevan ante esta Jurisdicción.

Concretamente, el Capítulo III de la norma ibídem, consagra los requisitos que deben reunir las demandas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

- 1. La designación de las partes y sus representantes.*
- 2. Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.*
- 3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
- 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.*
- 5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.*
- 6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.*
- 7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”*

Ahora bien, en cuanto al objeto de control jurisdiccional en lo contencioso administrativo, el artículo 104 del CPACA, señala:

“La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

- 1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable.*
- 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.*
- 3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes.*
- 4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.*

5. *Los que se originen en actos políticos o de gobierno.*

6. *Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.*

7. *Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de funciones propias del Estado...*

En este orden de ideas, en el sub examine, se solicita la nulidad de una sentencia emitida por la jurisdicción ordinaria, lo cual, evidentemente escapa de la órbita de las competencias de esta jurisdicción.

El artículo 278 del Código General del Proceso, establece los tipos de providencias que se profieren en el curso de los procesos judiciales, bajo el siguiente contenido normativo:

“Artículo 278. Clases de providencias. *Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.*

Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.

Negrilla fuera de texto

Dentro del acto acusado, quedó expuesto que la sentencia No. 48642 del 15 de octubre de 2014, emitida por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, determinó aplicar la compartibilidad de la pensión vitalicia de jubilación oficial que reconoció el Banco Cafetero al señor Javier López Correa (causante) con la pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, pensión que fue reconocida a la señora Fabiola García de López como de sobrevivientes mediante la Resolución No. 002436 del 27 de agosto de 2002 por parte del ISS.

Continuando con el análisis del caso, es preciso indicar que **la sentencia No. 48642 del 15 de octubre de 2014, emitida por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia**, constituye una decisión judicial que no es pasible del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en los términos expuestos en la demanda.

Corolario de lo anterior, es del caso rechazar la demanda, pues el acto acusado no contiene un acto administrativo que permita a este estrado judicial realizar el control de legalidad que se pretende, y en este evento, el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

dispone en su numeral 3° que se rechazará la demanda “*Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial.*”

Así las cosas, y una vez analizadas las pretensiones de la demanda, éste Estrado Judicial observa que carece de competencia para conocer de la presente controversia, pues al rechazarse la demanda de plano frente a la pretensión de nulidad de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia el 15 de octubre de 2014, y todas aquellas derivadas de la pretensión de nulidad, el libelo demandatorio pasaría a ser al medio de control de reparación directa, pues las demás pretensiones hacen alusión con declarar administrativa, extracontractual y patrimonialmente responsable a la Nación por falla en el servicio por error judicial y pago de sumas de dinero por concepto de daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales, por lo que, claramente la controversia aquí suscitada no es producto de un conflicto laboral surgido entre un ente público, y una persona natural, cuya vinculación laboral haya sido legal y reglamentaria, y que se esté discutiendo un asunto de seguridad social.

Por lo tanto, es claro para el Despacho que la presente demanda no tiene la vocación de dilucidar un asunto laboral, sino por el contrario, se trata de un asunto de acción u omisión de los agentes judiciales, no siendo este Despacho, el competente para conocer de la presente controversia.

Frente a lo anterior, se tiene que el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, señala los asuntos sobre los cuales tienen competencia los Juzgados Administrativos en primera instancia, refiriéndose en el numeral 2° específicamente a los de carácter laboral, señalando lo siguiente:

“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. *Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:*

(...)

2. *De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controvertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

6. *De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”*

Sombreado fuera de texto

Seguidamente, el artículo 156 ibídem, en cuanto al factor de competencia por territorio, indicó:

“ARTÍCULO 156. COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO. *Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:*

(...)

3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios.

6. Los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante”

Ahora bien, el artículo 104 del C.P.A.C.A., indica cuales son los procesos que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa, señalando para el efecto lo siguiente:

*“ART. 104.- **De la jurisdicción de lo contencioso administrativo.** La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de los dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

(...)

1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable.

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.”

Resaltado fuera de texto

En este orden de ideas, es del caso traer a colación el Acuerdo No. PSAA12-9454 del 23 de mayo de 2012, que en su Artículo 1° reza *“individualización de despachos que ingresan a la oralidad. Las funciones y competencias derivadas de la implementación del nuevo sistema procesal en jurisdicción Contenciosa Administrativa consagrado en la Ley 1437 de 2011, en este Distrito Judicial, a partir del 2 de julio de 2012, serán asumidas a nivel de Juzgados Administrativos de Bogotá, por los siguientes despachos Judiciales: Juzgado 26 - Sección Segunda (...)”*; es así como este Despacho Judicial entró a hacer parte de los Juzgados Administrativos que integran el sistema de oralidad de la sección segunda.

Ahora bien, tiempo atrás, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo N°. PSAA06-3345 de 13 de marzo de 2006, por medio del cual se implementaron los juzgados administrativos, en su artículo segundo dispuso que los juzgados del circuito judicial de Bogotá **se distribuyen en secciones**, la primera (del 1 al 6), la segunda (del 7 al 30), la tercera (del 31 al 38) y la cuarta (del 39 al 44) **conforme a la estructura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.**

Igualmente, el Acuerdo PSAA06- 3501 de 6 de julio de 2006, de la Sala Administrativa del H. Consejo Superior de la Judicatura, en su artículo 5, dispuso que el reparto de los asuntos a conocer por cada grupo de juzgados se realizaría según la correspondencia que entre ellos existe con las secciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En este sentido, se tiene que el Decreto 2288 de 1989, en su artículo 18 dejó establecido la conformación de las secciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así:

“ARTICULO 18. ATRIBUCIONES DE LAS SECCIONES. *Las Secciones tendrán las siguientes funciones:*

SECCIÓN PRIMERA. *Le corresponde el conocimiento de los siguientes procesos y actuaciones:*

- 1. De nulidad y restablecimiento del derecho que no correspondan a las demás Secciones.*
- 2. Los electorales de competencia del Tribunal.*
- 3. Los promovidos por el Gobernador de Cundinamarca, los Alcaldes del mismo Departamento o el del Distrito Especial de Bogotá, en los casos contemplados en los artículos 249 del Decreto-ley 1222 de 1986 y 101 del Decreto-ley 1333 de 1986.*
- 4. Las observaciones formuladas a los Acuerdos Municipales o Distritales y a los actos de los Alcaldes, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad.*
- 5. Las objeciones a los proyectos de Ordenanza o de Acuerdo, en los casos previstos en la ley.*
- 6. Los conflictos de competencia administrativa asignados al Tribunal.*
- 7. La revisión de contratos, de conformidad con la ley.*
- 8. Los recursos de insistencia en los casos contemplados en la Ley 57 de 1985.*
- 9. De los demás asuntos de competencia del Tribunal, cuyo conocimiento no esté atribuido a las otras Secciones.*

SECCIÓN SEGUNDA. *Le corresponde el conocimiento de los procesos de nulidad y de restablecimiento del derecho de carácter laboral, de competencia del Tribunal.*

SECCIÓN TERCERA. *Le corresponde el conocimiento de los siguientes procesos de competencia del Tribunal:*

- 1. De reparación directa y cumplimiento.**
- 2. Los relativos a contratos y actos separables de los mismos.*
- 3. Los de naturaleza agraria.*

SECCIÓN CUARTA. *Le corresponde el conocimiento de los siguientes procesos:*

- 1. De nulidad y restablecimiento del derecho relativos a impuestos, tasas y contribuciones.*
- 2. De Jurisdicción Coactiva, en los casos previstos en la ley.”*

De conformidad con lo planteado, y en especial teniendo en cuenta que los Jueces Administrativos del Circuito de Bogotá, son jueces especializados conforme a la estructura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el conocimiento del presente asunto corresponderá en primera instancia a los **Jueces Administrativos de Oralidad de la Sección Tercera del Circuito Judicial de Bogotá**, atendiendo las reglas de reparto señaladas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 5° del Acuerdo 3501 de 6 de julio de 2006, en concordancia con lo estatuido en el artículo 2 del Acuerdo N° PSAA06-3345 de 13 de marzo de 2006 y el Decreto 2288 de 1989, y en consideración a que este Despacho pertenece a la sección segunda dentro del sistema oral, el cual conoce **únicamente asuntos laborales y por consiguiente, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral**

Corolario de lo expuesto, este Despacho Judicial considera que no es competente para conocer del presente asunto, pues el mismo le corresponde a **los Jueces Administrativos de Oralidad de la Sección Tercera del Circuito Judicial de Bogotá**, en consideración a que la controversia se elevó bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no laboral.

En virtud de lo anterior el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO.- RECHAZAR la demanda interpuesta por la señora **FABIOLA GARCÍA DE LÓPEZ** en contra de la **NACIÓN-RAMAJUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, únicamente respecto de la solicitud de nulidad de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia el 15 de octubre de 2014 y todas aquellas derivadas de la solicitud de nulidad del fallo aludido, conforme lo manifestado en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. - DECLARAR QUE ESTE JUZGADO CARECE DE COMPETENCIA para conocer la demanda promovida por **FABIOLA GARCÍA DE LÓPEZ** contra la **NACIÓN-RAMAJUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**.

TERCERO. - REMITIR el presente expediente, una vez ejecutoriado este proveído, a los **JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE ORALIDAD DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ (REPARTO)**, por conducto de la Oficina de Apoyo, de conformidad con las consideraciones anotadas en la parte motiva.

CUARTO. - Para efectos legales se tendrá en cuenta la fecha de presentación de la demanda efectuada ante la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogotá.

QUINTO. - Por Secretaría déjense las constancias respectivas y dese cumplimiento a la mayor brevedad a lo aquí resuelto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

20

Firmado Por:
ANDRES JOSE
GNECCO
JUEZ
JUZGADO 026

 JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 17 DE MARZO DE 2021 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) _____ LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA
--

QUINTERO
CIRCUITO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
ce6309aaf2e9881a1e35ac6a5350fb103b9df78f1ec28ed4e041fae25a4d686e
Documento generado en 16/03/2021 01:51:28 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>